



Consenso y conflicto a la luz de las tres fases del conflicto distributivo en la Argentina Kirchnerista (2002-2011)

Igal Kejsefman¹

Recibido: 02/07/2018 / Aceptado: 17/09/2018

Resumen. El presente trabajo pretende aportar al estudio del proceso de crecimiento de la economía argentina tras la caída de la Convertibilidad (2002-2011) entendiendo que para ello resulta fundamental analizar el momento político de la acumulación de capital. Por este motivo nos centraremos en el estudio del modo en que el Estado reconstruyó el orden tras la caída de la Convertibilidad (2002-2011), analizando específicamente su intervención económica. A través del conflicto distributivo buscaremos abordar la “dimensión política de la política económica” (Piva, 2015) que permitió en un primer momento (2002/3) reconstruir el consenso, que desde 2005 comenzó a erosionarse y finalmente mutó en conflicto abierto en 2008 durante el denominado Conflicto del Campo. A la luz del conflicto distributivo nos proponemos abordar el modo en que las fuerzas sociales se enfrentaron o tejieron alianzas por lo que primará a lo largo del artículo un nivel de análisis fraccionalista.

Palabras Clave: Conflicto distributivo; Argentina; postconvertibilidad; y conflicto del campo.

[en] Consensus and conflict through three phases of the distributive conflict during the Kirchner Administration (Argentina, 2002-2011)

Summary. The present work intends to contribute to the study of the growth process of the Argentine economy after the fall of the Convertibility (2002-2011) understanding that for this it is fundamental to analyze the political moment of the accumulation of capital. For this reason, we will focus on the study of how the State reconstructed order after the fall of Convertibility (2002-2011), specifically analyzing its economic intervention. Through the distributive conflict we will seek to address the “political dimension of economic policy” (Piva, 2015) that initially allowed (2002/3) to reconstruct the consensus, which since 2005 began to erode and finally mutated into an open conflict in 2008 during the so-called Conflict of the Countryside. Through the distributive conflict we propose to address the way in which social forces clashed or weaved alliances so that a level of fractionalist analysis will prevail throughout the article.

Keywords: Distributive conflict; Argentina; postconvertibility; and countryside conflict.

Sumario. 1. Introducción y recorte del problema; 2. De la crisis de la Convertibilidad al “todos ganan”; 3. Del “todos ganan” a la erosión del consenso; 4. Del Conflicto del Campo al *Impasse*; 5. Consideraciones finales; 6. Bibliografía.

Cómo citar: Kejsefman, I. (2018) Consenso y conflicto a la luz de las tres fases del conflicto distributivo en la Argentina Kirchnerista (2002-2011), en *Cuadernos de Gobierno y Administración Pública* n° 5-2, 97-116.

¹ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

1. Introducción y recorte del problema

El presente trabajo pretende aportar al estudio del proceso de crecimiento de la economía argentina tras la caída de la Convertibilidad (2002-2011) entendiendo que para ello resulta fundamental analizar el momento político de la acumulación de capital. Por este motivo nos centraremos en el estudio del modo en que el Estado reconstruyó el orden tras la caída de la Convertibilidad (2002-2011), analizando específicamente su intervención económica y dejando fuera otros aspectos como la ideología, el sistema de partidos, u otros aspectos que hacen a la construcción del consenso y la reproducción social. A su vez, entendemos que el Estado no se constituye inmediatamente un representante del capital sino como el garante de las relaciones capitalistas (O'Donnell, 1982), y la forma que asume en cada momento está vinculada profundamente a la lucha de clases (Poulantzas, 1986). Entendemos al *conflicto distributivo* en tanto una manifestación particular de la categoría lucha de clases –que no niega otras manifestaciones ni las subordina–, que refiere a las disputas que se abren entre clases y fracciones de clase en torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del plus trabajo.

Por lo tanto, a la luz del conflicto distributivo nos proponemos abordar el modo en que las fuerzas sociales se enfrentaron o tejieron alianzas entendiendo que, si bien los diferentes agrupamientos de capitales individuales “emergen de la competencia, aquellos agrupamientos son propiamente políticos” (Bonnet, 2012: 96), tal como el antagonismo con los trabajadores –que, a su vez, tienen sus propios agrupamientos y conflictos internos. De esta forma, primará un nivel de análisis fraccionalista del conflicto distributivo. Para operacionalizar el estudio de conflicto distributivo tomaremos en cuenta los precios centrales de la economía (precio de los bienes, tasa de interés, tipo de cambio y salario), la productividad, la distribución del ingreso (masa salarial/PBI), índice de Gini, desempleo, pobreza, informalidad laboral y el sistema impositivo.

Situándonos en el momento político de la acumulación de capital, los capitalistas y los trabajadores no se nos aparecen como la personificación inmediata del capital y el trabajo respectivamente, sino como personas de carne y hueso que protagonizan un enfrentamiento real que involucra todos los aspectos de la vida: una lucha de clases. Resulta evidente que los trabajadores no conforman inmediatamente una clase *en sí para sí*, aunque cabe aclarar que los capitalistas tampoco. Los capitalistas no se comportan inmediatamente como clase, sino que forman una clase en tanto se comportan como capitalistas, es decir, como capitales individuales que compiten –*para sí*– por la apropiación de plusvalor, lo que vuelve contingente su constitución *en sí para sí*. *Ex ante* sólo encontramos capitalistas o vendedores de fuerza de trabajo estrictamente individuales. Su constitución como clases *ex post presupone una mediación*, abre lugar a la crisis, a victorias y derrotas y por lo tanto a la indeterminación, a la historia.

Cabe destacar también que si bien la forma de Estado emerge del enfrentamiento entre clases y fracciones de clase, la autonomía del Estado respecto del proceso productivo es una “aparición real” (Lechner, 1977: 359)². La autonomía es real en tanto la condición doblemente libre del trabajador (Marx, [1867] 2006) obliga a que la clase dominante relegue la coerción a un tercero, el Estado. Pero al mismo tiempo es ilusoria en tanto el Estado mantiene un vínculo orgánico con la relación social capital: la rela-

² Similares son los conceptos como los de “forma objetiva” (Lukács, 1985), “ilusión objetiva” (Horkheimer y Adorno, 2006) o “abstracción real” (Sohn-Rethel, 1980).

ción salarial y la estructura económica le imponen límites a la intervención económica y por lo tanto a la construcción del orden. Eso explica por qué un Estado no puede tomar cualquier política económica sin consecuencias, tiene márgenes de maniobra.

De este modo, a través del conflicto distributivo buscaremos abordar la “dimensión política de la política económica” (Piva, 2015) que permitió en un primer momento (2002/3) reconstruir el consenso, que desde 2005 comenzó a erosionarse y finalmente mutó en conflicto abierto en 2008 durante el denominado Conflicto del Campo. Por último, cabe aclarar que, si la clave para la comprensión de la postconvertibilidad radica en la crisis del 2001, está sólo puede comprenderse a la luz de las disputas, victorias y derrotas de clases y fracciones de clase en la Convertibilidad. Por lo tanto, dedicaremos en el próximo apartado un espacio para la Convertibilidad y su crisis.

2. De la crisis de la convertibilidad al “todos ganan”

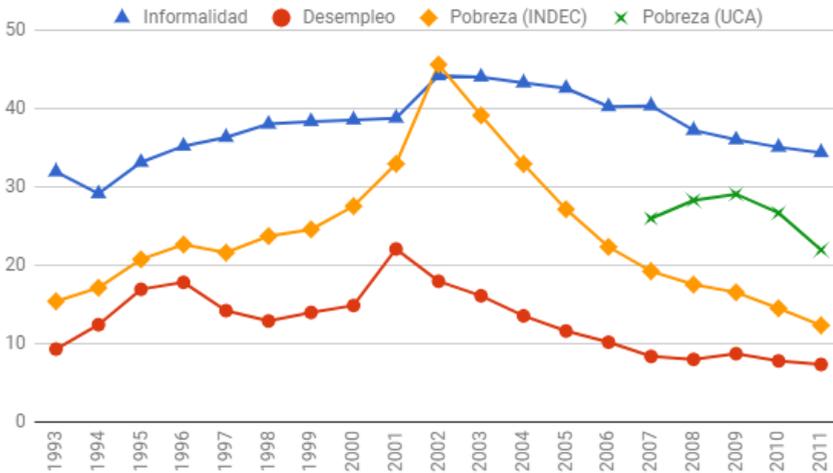
Hacia 1998 la acumulación de capital en Argentina comenzó a menguar a partir de una convergencia de factores internacionales (crisis en la periferia capitalista), estructurales (creciente diferencial entre la productividad local y la media internacional) y sociales (resistencia al ajuste) poniendo en tensión crecientemente la “hegemonía débil” (Piva, 2012) que sostenía la Convertibilidad (1 peso = 1 dólar). Sin embargo, la legitimidad de la cual gozaba la Convertibilidad al interior de la clase dominante impedía, incluso en períodos de fuertes tensiones, que alguna fracción planteara su abandono. En mayo de 2001 el ministro Cavallo anunció el Megacanje, un plan que buscó diferir el pago inmediato de la deuda –como forma de alejar el default– a un costo elevadísimo. En julio, el Estado preparó ajuste con el plan Déficit Cero, incluyendo un recorte del 13% a los jubilados y empleados públicos, con el fin de sostener la plena apertura de la economía y la paridad con el dólar. “Este ajuste es particularmente relevante, decimos, porque desataría la oleada final de luchas que culminó en diciembre con el derrumbe de la Convertibilidad” (Bonnet, 2002: 8).

El recrudecimiento del ciclo de luchas en Argentina mostró un gobierno débil e incapaz de reconstruir su legitimidad, elemento que convenció al FMI de la inviabilidad del esquema convertible en general y de una dolarización en particular (Aranda, 2004). El conflicto que emergió “desde abajo” resultó decisivo en el desenlace de la confrontación entre fracciones de la burguesía. El cuadro social da cuenta de por qué la salida de la Convertibilidad no puede explicarse únicamente como una decisión técnica ni un designio teleológico, sino que debe contemplar las correlaciones de fuerzas. La consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola” testimonia, por un lado, la unidad y fortaleza de los trabajadores que desorganizó la unidad de los capitalistas, es decir, que desorganizó la clase; así como también la fragmentación y yuxtaposición de diferentes luchas sectoriales. Más allá de estas debilidades, el levantamiento popular de 2001 marcó un límite respecto de lo que el pueblo estaba dispuesto a soportar (GRÁFICO 1). Por lo tanto, analizada desde el conflicto distributivo, la crisis de la Convertibilidad es la crisis de una determinada correlación de fuerzas entre clases y fracciones de clase que estaban cristalizadas en una política cambiaria. La exposición de los hechos da cuenta del carácter contingente de la salida de la Convertibilidad vía devaluación. En ese sentido, resultó central el modo en que evolucionó el conflicto social en general y la forma en que se fueron cristalizando nuevas correlaciones de fuerza en el marco del conflicto distributivo en particular.

En los primeros días del año 2002, luego de una maratónica asunción de Presidentes –que incluyó el anuncio del default de la deuda externa–, Eduardo Duhalde quien apoyaba una salida devaluacionista quedó a cargo del Poder Ejecutivo y el Congreso aprobó el fin de la Convertibilidad.

Analizando el conflicto distributivo, la resistencia que impusieron los trabajadores a la continuidad de la Convertibilidad vía baja salarial o aumento de la productividad (aumento de la explotación) encerró al régimen monetario en un callejón sin salida y bifurcó los caminos de las fracciones de la burguesía, dispersando su unidad. Asimismo, el fin de la Convertibilidad signó el comienzo de una nueva disputa por la apropiación de los beneficios de la transferencia de ingresos –a causa de la devaluación– entre las fracciones capitalistas y los trabajadores. Los sectores más beneficiados fueron, por supuesto, los exportadores, particularmente del agro y la agroindustria³, junto con productores de manufacturas industriales no competitivos internacionalmente. El proyecto del Grupo Productivo, que logró imponerse sobre las restantes fracciones capitalistas, propugnaba un perfil productivo “vinculado con las exportaciones y, estrechamente asociado a ello, de una estructura manufacturera muy asentada en ramas que se ubican en las primeras etapas del procesamiento industrial” y supeditado a la caída de los salarios (Schorr, 2001: 9). Su victoria, materializada en la asunción de Mendiguren al frente del Ministerio de Producción, no implicó que su proyecto se haya concretado sin mediaciones ni oposiciones.

Gráfico 1. Pobreza, desempleo e informalidad laboral (%) (1993–2011)



Fuente: Elaboración propia en base a CEDLAS, CEDLAC y Observatorio Social de la UCA.

Nota: Como línea de pobreza se tomó la población que vive con menos de 4 dólares diarios. Se consideró trabajador/a informal a quienes no gozan de aportes jubilatorios.

³ Beneficiados no sólo por la devaluación sino especialmente por el nuevo contexto internacional que se abrió a partir de la incorporación de China a la OMC que aquí no podemos analizar.

Por un lado, durante la breve gestión de Remes Lenicov al frente del Ministerio de Economía se pesificaron las deudas beneficiando a hogares endeudados, pero sobre todo a grandes empresas que se habían endeudado durante la Convertibilidad. Asimismo, la devaluación de casi el 300%, acompañada de una inflación interanual del 40,9% (INDEC), implicó una licuación de los salarios reales en un 30% que redujo la participación de los asalariados en el PBI del 38% al 31%, viéndose más afectados los trabajadores informales. A la violencia de la moneda se sumó, además, la represión directa: los asesinatos de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán actuaron como una medida disciplinadora destinada a los sectores sociales que desbordaban la integración propuesta por el Estado.

Por el otro, sin embargo, el levantamiento popular del 2001 impuso a la clase dominante nuevas condiciones para la (re)construcción de su hegemonía, imposible de agotar en el uso de la violencia: no atender la cuestión de la pobreza no constituía una opción para quienes pretendían mantener el gobierno y el orden –sortear la consigna “que se vayan todos”–, en un contexto de fortaleza de los sectores populares y de continuas manifestaciones e impugnaciones del sistema político durante el 2002. Esto manifiesta que si bien los sectores exportadores se vieron muy favorecidos por la devaluación, los “frutos del comercio internacional” (Prebisch, 1949) debían alcanzar a quienes se reproducen en el mercado interno (tanto capitalistas como trabajadores). De esta manera, la correlación de fuerzas sancionó un “derrame”, una mediación estatal que endogeneizó el resultado del conflicto distributivo redistribuyendo ingresos desde los sectores exportadores netos hacia los importadores netos (trabajadores y burguesía mercadointernista). Esa redistribución tuvo dos vías/mecanismos. La primera asociada a la disponibilidad de divisas que requieren los importadores netos adquirir bienes de capital e insumos imprescindibles para la acumulación de capital. En segundo lugar, la intervención económica del Estado –fruto del conflicto distributivo– impuso derechos de exportación (retenciones) de modo que nutrió al Poder Ejecutivo de los medios para llevar adelante políticas expansivas.

Durante el mismo año, contrario al proyecto impulsado originalmente por el Grupo Productivo, el propio de Mendiguren debió promover una industrialización ligada a la exportación en una economía globalizada, que a su vez permita mejores salarios (de Mendiguren, Clarín 18/1/2002, en Gaggero y Wainer, 2002), y crease consumidores para la burguesía mercadointernista –al estilo keynesiano– y no competitiva a nivel internacional, garantizando el reimpulso de la tasa de ganancia. El aspecto político de la política económica (Piva, 2015) se propuso a la salida de la Convertibilidad la construcción de un consenso que, vía “derrame” (Ortiz y Schorr, 2007), incluya a los sectores del mercado interno (tanto capitalistas como trabajadores). El GRÁFICO 1 nos aproxima a la complejidad del año 2002. Por un lado, se incrementaron la pobreza y la informalidad y se desplomó el salario real, que a la vez impactó en la participación asalariada. Por el otro, comenzó a declinar el desempleo y se sentaron las bases de las políticas expansivas que tendrían sus efectos en los indicadores a partir de 2003. Por último, el sector financiero y las empresas extranjeras que adquirieron servicios públicos⁴ durante las privatizaciones fueron las fracciones más perjudicadas.

Al momento hemos expuesto el mapa de correlaciones de fuerza entre clases y sus fracciones en Argentina hacia el 2002, si bien no pretendimos agotar todas las aris-

⁴ Por la Ley de Emergencia Económica sancionada en 2002 quedaron congeladas las tarifas (en pesos).

tas del problema. La lucha popular y la alianza tejida entre los sectores desocupados, trabajadores informales y formales, la clase media empobrecida e industriales –que aceptaban mejoras en la distribución del ingreso–, presionó por “perforar la copa”, es decir, impulsar la distribución (progresiva) del ingreso. Sin esta potencia social no puede explicarse que los ingresos de los exportadores netos se hayan trasladado hacia el mercado interno. “Las vacilaciones, las concesiones, las marchas y contramarchas del nuevo gobierno provisional de E. Duhalde no hacen sino poner en evidencia que los representantes de la burguesía aprendieron, después de sacrificar dos administraciones, que [las] relaciones de fuerza cambiaron” (Bonnet, 2002: 30). La presión “desde abajo” condicionó la reconstrucción de la dominación, presionando al Estado para construir una nueva mediación haciendo concesiones, transfiriendo ingresos a fracciones no competitivas y encausando el conflicto dentro de su institucionalidad (así sea mediante la fuerza pública). Los asesinatos de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002, a la vez que aleccionaron sobre los márgenes de acción de los trabajadores, aceleraron el llamado a elecciones y el recambio gubernamental. A quince meses del estallido popular del 2001, la asunción de Néstor Kirchner con el 22% de los votos imponía un condicionamiento social fuerte para la reconstrucción del consenso.

Gráfico 2. PBI REAL 2001 = 100. Participación de las remuneraciones de los trabajadores asalariados (%) (1993-2011)



Fuente: Elaboración propia en base a FLACSO⁵.

La permanencia del equipo económico de Duhalde, encabezado por el ministro de Economía Roberto Lavagna –al tiempo que sus principales medidas– más allá del recambio presidencial, dio signos del consenso logrado en torno a su programa. En los años sucesivos el crecimiento del producto coincidió con crecimientos salariales y de productividad, aunque en diferentes proporciones. En los primeros años de la postconvertibilidad los trabajadores vieron crecer su salario real un 5%, al tiempo que creció el empleo y disminuyó sensiblemente la pobreza (GRÁFICO 1). “Sin embargo, cuando

⁵ Agradecemos profundamente la colaboración de Pablo Manzanelli, quien facilitó el acceso a la información.

estas transformaciones en el mercado de trabajo se traducen, sobre la base de las mismas estadísticas, en términos de distribución del ingreso se constata una situación sorprendente que no parece estar en consonancia con estas modificaciones” (Basualdo, 2008: 3). En 2003 el crecimiento real del PBI en un 8% no fue acompañado por aumentos salariales semejantes, lo cual determinó que la participación de los asalariados en el producto haya permanecido estable. En 2004, el crecimiento del producto estuvo por encima del crecimiento de los salarios, elevando la participación de los trabajadores en el conjunto de la economía, aunque aún permanecía por debajo de los peores niveles de la Convertibilidad, en 1997. Dicho de otro modo, los trabajadores percibían más, pero de una torta mucho más grande (GRÁFICO 2). Durante el año 2005 los trabajadores volvieron a ganar peso en la distribución del ingreso, aunque recién ese año lograron alcanzar los niveles de 1997, el nivel más bajo de la Convertibilidad. El salario real volvió a crecer más rápido que la productividad (GRÁFICO 3), aunque persistió muy por debajo del 2001, el peor año de la Convertibilidad. El “derrame” permitió dinamizar la acumulación y, a la vez, mejorar los indicadores sociales, como puede observarse en el Gráfico 1.

En su conjunto el análisis de los gráficos aquí presentados nos permite localizar el corazón de un consenso donde “todos ganan”: entre los trabajadores y los estratos más bajos la recuperación económica y social permitía depositar la confianza en ambos gobiernos; entre las fracciones de la burguesía, las ganancias se multiplicaban para los exportadores tanto agropecuarios como agroindustriales e industriales. Al mismo tiempo, como ya señalamos, la barrera cambiaria a las importaciones benefició a capitalistas cuya producción no podía competir en el contexto económico previo y se realizaba fundamentalmente en un mercado interno que estaba en crecimiento. Las dos vías para el derrame desde el sector externo hacia el mercado interno (disponibilidad de divisas y gravámenes al comercio exterior) permitieron erigir un Estado que pretendió colocarse como un tercero neutral, que pudiera mediar en la conciliación de clases, más allá de los intereses particulares.

Gráfico 3. Productividad y salario real. 1995-2011. 2001 = 100



Fuente: Elaboración propia en base a FLACSO.

3. Del “todos ganan” a la erosión del consenso

Durante el año 2005, cuando llegaron las primeras elecciones legislativas que debía enfrentar Kirchner, las diferentes fracciones de la burguesía comenzaron a discutir el destino económico del país cuya puja se reflejó en la aceleración de las principales variables, invirtiendo su tendencia. Los capitalistas exportadores netos comenzaron a plantear la necesidad de “enfriar la economía” para evitar la inflación (la economía venía creciendo a tasas cercanas al 10%) y tampoco ahorraron críticas a las retenciones. Como contracara, la fortaleza popular ponía en duda las posibilidades de éxito de una empresa que implicaba poner fin a la recuperación de las condiciones de vida de los trabajadores. En este contexto, la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires expresó la derrota de la alternativa del ajuste y la persistencia de la redistribución de recursos (plusvalía) hacia el mercado interno. Consecuentemente, el equipo económico de Lavagna (quien planteaba la necesidad de desacelerar el crecimiento del mercado interno) se retiró del gobierno siguiendo el camino de Prat Gay, quien fue despedido del Banco Central un año antes por interceder en favor de los bonistas extranjeros en la negociación de la quita de la deuda y por querer aceptar la supervisión del FMI en la política fiscal. Si de determinaciones económicas se tratase, el debate se tornaría inexplicable: en tanto el Estado sería una personificación directa (racional) del capital, carecería de disyuntivas. En cambio, desde la perspectiva que venimos trabajando, el Estado no se constituye como el representante del capital sino como el garante de las relaciones capitalistas, y la forma que asume en cada momento está vinculada profundamente a la lucha de clases (recordemos que en el presente artículo nos ceñimos al conflicto distributivo por la definición del trabajo necesario y la apropiación del plustrabajo como una manifestación particular). La asunción de Felisa Miceli –de formación desarrollista– en el Ministerio de Economía anticipó la nueva intensidad de la intervención del Estado y la redistribución progresiva del ingreso vía gasto público. Dos semanas más tarde, el gobierno anunció que utilizaría el excedente de reservas internacionales disponible para cancelar en un solo pago la deuda con el FMI y cortar los vínculos con la institución.

Analizar la evolución fiscal y el gasto público, en conjunto con otros elementos, nos permite distinguir diferentes fases al interior del período que estamos analizando en el presente trabajo. Observando estas variables confirmamos que mientras que en el primer momento de la postconvertibilidad el crecimiento porcentual de los ingresos superaba el crecimiento porcentual de los gastos, entre 2005 y 2008 el crecimiento porcentual del gasto superó el crecimiento porcentual de la recaudación, lo cual se verifica también en el cambio de pendiente de la serie del superávit fiscal (GRÁFICO 4). Por lo tanto, si bien desde el punto de vista de la estructura económica los sectores exportadores constituyeron la vanguardia del relanzamiento de la acumulación, desde el punto de vista del conflicto distributivo la Recaudación, el gasto público y el superávit primario nos permite comprender que, contradictoriamente, la retaguardia (los capitales mercadointernistas y el conjunto de los trabajadores) logró imponer una forma distributiva –en sentido amplio– sobre los capitalistas orientados a la exportación.

La mediación estatal permitió cerrar la crisis del neoliberalismo, reordenar la clase dominante y legitimar el nuevo orden mediante el “todos ganan”, por el cual, como vimos, unos ganan más que otros en función de las victorias y derrotas pasadas

y presentes. Los GRÁFICOS 2, 3 y 4 dan testimonio de la correlación entre fuerzas sociales desde 2005: el salario real creció más rápido que la productividad si bien en 2007 todavía no había alcanzado los niveles de la década del 90; la distribución del ingreso mejoró, aunque recién en 2007 superó el máximo relativo de 1998; la pobreza y el desempleo se redujeron muy marcadamente; y la informalidad descendió, pero en 2007 aún permanecía en torno al 40%. En su conjunto estos elementos caracterizan una segunda fase. Mientras “todos ganan”, cambian las velocidades y proporciones en que ganan capitalistas y trabajadores, y por lo tanto cambia la ecuación de la alianza de gobierno.

Los mencionados cambios reanimaron el conflicto distributivo en torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del plustrabajo abriendo una segunda fase de “consenso erosionado” en función del devenir de las correlaciones de fuerza. Las series temporales y argumentos hasta aquí presentados podrían llevarnos rápidamente a predecir un conflicto entre el conjunto de los capitalistas y los trabajadores. Sin embargo, las formas de presentar los datos hasta el momento podrían conducirnos a una simplificación o incluso introducir un sesgo en las conclusiones: tengamos en cuenta que, en torno a los estudios de la distribución del ingreso, suelen primar estudios que analizan el conjunto de las economías, abordando el objeto a partir del promedio de la productividad, del salario, del costo laboral, del producto o de la distribución. Esta advertencia nos permite deducir que existen sectores que en cada serie se mantuvieron por arriba o por debajo del promedio, dado que no todos los sectores crecieron en la misma proporción, ni todos los trabajadores cobraron el mismo salario, ni en todos los sectores la participación en el producto o la productividad es la misma. Conocer de modo diferencial el desenvolvimiento de cada rama nos otorgaría información adicional para comprender el conflicto distributivo y sus fases. A partir de bibliografía secundaria y de la reinterpretación de los datos expuestos en dichos trabajos, presentamos nuestra lectura del desarrollo del conflicto entre las clases y fracciones de clase.

Gráfico 4. Recaudación, gasto público y superávit primario, en pesos corrientes (2002-2011)



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía y AFIP para Argentina.

Los datos arrojados por el estudio de Porta, Santarcángelo y Schteingart sobre el *Excedente y desarrollo industrial en Argentina* (2014)⁶ y reprocesados a la luz de la distinción entre sectores exportadores e importadores netos indican que desde el 2005 el conjunto de los trabajadores consiguió aumentos salariales mayores a la productividad y que a su vez, en diferentes proporciones, todos mejoraron su participación en el producto sectorial. Desagregando sectorialmente, los trabajadores empleados en los sectores importadores netos gozaron una creciente brecha entre (a) sus incrementos salariales y (b) los aumentos –o incluso caída– de la productividad. Por su parte, esta brecha entre los mencionados sectores fue mayor que la experimentada en los sectores exportadores netos. A su vez, el conjunto de los sectores incrementó su producción, generando una demanda creciente de divisas al tiempo que, como dijimos, una mayor parte de ese producto fue apropiado por los trabajadores. Las condiciones estructurales de la economía determinaron que los sectores importadores netos fueran mano de obra intensivos, mientras que los sectores exportadores netos fueran capital intensivos⁷, empleando una menor proporción de la mano de obra. La mayor intensidad en la transferencia de recursos (plusvalía) hacia el mercado interno cristalizó la nueva correlación de fuerzas, desfavorable para las fracciones capitalistas exportadoras netas, a la vez se tornó en condición necesaria –aunque no suficiente– para la canalización de las demandas de los trabajadores mediante el acceso al consumo, a los servicios públicos y a los beneficios sociales.

En cuanto a las empresas agropecuarias/agroindustriales, estas articularon a propietarios –desde los pequeños hasta los grandes– que, dados los altos precios internacionales y los montos de los alquileres, han decidido arrendar sus campos (Barsky y Dávila, 2009: 101). Por lo tanto, las condiciones estructurales del agro argentino les otorgaron a las empresas la capacidad de trasladarle el peso tributario de las retenciones a las exportaciones de un modo indirecto a los rentistas –vía baja de la renta percibida–. Esto explica por qué desde 2006 comenzaron a registrarse crecientes protestas de las entidades patronales agropecuarias –cuyos afiliados son en su mayor parte propietarios/rentistas– y no de las empresas agropecuarias (en su mayoría enroladas en la UIA o en la COPAL) que al exportar tributan la retención.

El punto de partida de los reclamos estuvo vinculado a la veda exportadora de carne que pretendía hacer bajar los precios internos, conformando una modalidad adicional de la redistribución desde los sectores exportadores netos hacia los importadores netos (“derrame”). La designación de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior no relajó las tensiones, sino que tres meses más tarde las Confederaciones Rurales Argentinas anunciaron el primer paro agropecuario. Días más tarde, ningún funcionario del gobierno asistió a la apertura de la exposición Rural de Palermo, que usualmente convocar a las más altas esferas del poder. Por otra parte, la obligación de liquidar las divisas para alimentar las reservas del Banco Central sí tocaba de cerca los intereses de los exportadores, aunque de un modo más

⁶ Agradecemos profundamente a sendos autores habernos facilitado el acceso a la base de datos de dicho trabajo.

⁷ Cabe aclarar la proposición: los “exportadores netos” –generalmente– son capital-intensivos (sectores modernizados) pero no todos los sectores capital intensivos son exportadores netos. Tal es el caso de la industria automotriz, que en tanto parte de la producción se realiza localmente configura un sector estructuralmente deficitario.

relativo dado que las divisas podían ser recompradas (para ser remitidas luego a las casas centrales, por ejemplo).

Por lo tanto, en la fase iniciada en 2005 el conflicto distributivo reapareció con importantes particularidades. Por un lado, no se trató de un enfrentamiento directo entre el conjunto de los trabajadores y el conjunto de los capitalistas –como se nos aparecía antes de contemplar las desagregaciones sectoriales–. Por el otro, debemos ser cautos con el nivel de enfrentamiento: (a) en tanto y en cuanto los capitalistas exportadores netos lograron trasladar las cargas impositivas sobre los rentistas, sus intereses no se vieron directamente afectados por el “derrame” –por la vía fiscal–, sino sólo potencialmente; y (b) la liquidación de las divisas permitió al Banco Central su reasignación para la compra de insumos o bienes de capital de otros sectores, pero ante su abundancia las tensiones no se manifestaron de un modo inmediato. En conclusión, la fortaleza (relativa) de los trabajadores y su capacidad para imponer al Estado la absorción de sus demandas desorganizaron la unidad de la clase capitalista en tanto la dividió entre aquellos que gozan de la demanda externa y aquellos que dependen del “derrame” para la ampliación de la producción y la realización de las mercancías en el mercado interno; en otras palabras, se trató de un corte vertical donde fracciones de la burguesía importadora neta junto con los trabajadores enfrentaron a sectores exportadores con el fin de dilatar la acumulación en el mercado interno. La segunda fase de la postconvertibilidad expresó, entonces, un consenso erosionado “desde arriba” a raíz de la creciente insatisfacción por la sangría de recursos hacia los sectores mercadointernistas (en su conjunto). Este corte trajo aparejado cambio en las alianzas a diferentes niveles institucionales.

En primer lugar, en el año 2003 llegó a su fin el pacto de alternancia que mantenían los dos principales nucleamientos⁸ –Movimiento Industrial Argentina (MIA, históricamente aperturista) y Movimiento Industrial Nacional (MIN, históricamente proteccionista)– de la Unión Industrial Argentina (UIA) desde 1993. Dicho pacto se rompió por divergencias entre las agrupaciones –y en su interior– y la conducción de la institución quedó a cargo de la COPAL (Coordinadora Industrial de Productoras de Alimentos) enrolada históricamente en el MIA. Las mencionadas diferencias motivaron el quiebre y reestructuración de las agrupaciones bajo dos nuevas vertientes (Dossi, 2012): Industriales (ex MIN) y la Celeste y Blanca (ex MIA). En 2005 ambas agrupaciones dieron nuevas muestras de consenso mediante un pacto de alternancia que, en el primer período, condujo Héctor Méndez (industria plástica) de la Celeste y Blanca. Con la presidencia de Lascurain (Industriales) desde el 2007 la erosión “desde arriba” y el malestar de los sectores exportadores llegaron de la mano de la COPAL a la UIA.

En segundo lugar, las principales organizaciones agropecuarias hicieron llegar su displacencia con la política económica gubernamental en reiteradas oportunidades. La novedad del período radicó en la creciente coordinación entre entidades históricamente enfrentadas, coherente con las transformaciones ya descriptas en el ámbito rural y agroindustrial. Las “Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque de muy diferente composición, ideología, extracción de sus asociados y objetivos generales, [se reunían] con cierta

⁸ En: <https://www.lanacion.com.ar/480693-uia-sin-consenso-para-elegir-presidente>

frecuencia para acordar posiciones comunes frente a desafíos serios para el sector” (Merlo y Muro de Nadal, 2010: 2).

En tercer lugar, el movimiento obrero organizado en la Confederación General del Trabajo (CGT) siguió sosteniendo su adhesión a las políticas oficiales y buscó ocupar puestos expectables en las elecciones generales de 2007, mientras que la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que nació en la década anterior en oposición a las políticas neoliberales veía con recelo al gobierno kirchnerista y buscaba, a través de la Constituyente Social, poner en marcha un proceso similar al del Partido de los Trabajadores en Brasil articulando sindicatos y movimientos sociales.

Por último, en el ámbito político-electoral la constitución de la Concertación Plural para las elecciones presidenciales del 2007 también dio cuenta de la vigencia del consenso: una alianza entre los dos partidos mayoritarios de Argentina, el Partido Justicialista y un sector disidente de la UCR –y otros partidos menores–. La fórmula estuvo encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Diez días después de la victoria electoral, el gobierno anunció un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones.

4. Del conflicto del campo al *impasse*

Desde el inicio de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los sectores exportadores se propusieron profundizar su orientación y contener la sangría de recursos (plusvalía) hacia una esfera de la producción de la que no participan. A las habituales rispideces con el campo se sumó un comunicado de la UIA el 20 de febrero de 2008, en el cual planteaba que “es indiscutible que la recuperación del poder adquisitivo de la población en general y del trabajador industrial en particular debe mantenerse, pero para lograr este objetivo, es condición necesaria que la economía siga creciendo en un marco estable y previsible. Para esto es necesario que no se vea afectada la competitividad del sector productivo y que no se convaliden expectativas inflacionarias por reclamos infundados”⁹. De este modo, la UIA –en su conjunto– conducida desde el 2007 por Lascurain (Industriales), comenzaba a transmitir una preocupación por la velocidad que adquiriría la distribución progresiva del ingreso, poniendo de manifiesto la fortaleza relativa que de los trabajadores en el conflicto distributivo.

Por su parte, el Gobierno Nacional recién electo entendía que la construcción del consenso seguía dependiendo de la redistribución desde la burguesía exportadora neta hacia aquellos cuya reproducción se vincula al mercado interno (capitalistas importadores netos y trabajadores). Con ese propósito impulsó una resolución de retenciones móviles (Resolución 125/08). Insistimos en que el Estado no se constituye como el representante del capital sino como el garante de las relaciones capitalistas, lo que asocia la forma de Estado (y su intervención en los diferentes ámbitos) al devenir de la lucha de clases. Insistencia no injustificada en tanto coloca a la Resolución 125 como resultado del conflicto distributivo, como forma –contingente– de garantizar la integración de las demandas de los trabajadores dentro del marco estatal mediante políticas redistributivas. El estudio de las políticas distributivas durante el

⁹ En: <http://www.uia.org.ar/noticia/404>

fordismo (Aglietta, [1976] 1999) en el contexto alemán de los años ‘70 elaborado por Muller y Neussus ([1971] 2017) pueden aportarnos herramientas para interpretar el estallido del conflicto: “mantener ‘la paz social’ es, por consiguiente, un factor determinante para el límite inferior de los beneficios sociales (muy próximos a mantener la capacidad de ‘trabajo y rendimiento, capacitación educativa y movilidad’). La ‘estabilidad de precios’ y la ‘disposición de la gerencia a invertir’ definen el límite superior” (1971: 23)¹⁰.

Tras la crisis de la Convertibilidad la redistribución del ingreso mediante las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y comercial permitió eludir los “límites inferiores” de la “paz social” –construyó consenso entre los trabajadores–. Desde el año 2005, la creciente intensidad del “derrame” comenzó a deteriorar el consenso entre fracciones de la burguesía. En el año 2008, las retenciones móviles, que para el caso de nuevos aumentos de los precios internacionales preveían una carga tributaria que podría haber superado el 50%¹¹, flanquearon el “límite superior” de la “paz social” y lanzaron a las centrales empresarias del campo a la protesta. El 11 de marzo de ese año la Federación Agraria anunció el estado de alerta y movilización. El 12 de marzo se declaró el paro agropecuario con el apoyo de las cuatro entidades rurales, ahora formalmente cohesionadas en la Mesa de Enlace. Desde esta perspectiva, el llamado Conflicto del Campo no constituyó el reflejo de la crisis internacional, sino la crisis de una forma distributiva enraizada en las disputas en torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del plustrabajo. Las consecuencias de la crisis internacional sobre la economía argentina –que sí existieron– posiblemente no hubieran conducido al Conflicto del Campo bajo otra configuración de las correlaciones de fuerza internas.

Frente al estallido de este conflicto, la UIA sostuvo una posición distante respecto de la Mesa de Enlace. Tanto es así que, el mismo día del anuncio de las retenciones, su presidente, Lascurain, sostuvo una reunión con la Presidenta de la Nación donde “ratificaron que la agregación de valor será la directriz del desarrollo productivo (...). También se enfatizó la necesidad de *continuar preservando el mercado interno*, frente a riesgos globales y de promover una inteligente inserción argentina en los mercados internacionales”¹². Cinco días más tarde, la cámara industrial se reunió con el Ministro de Economía –quien había firmado la resolución 125–; “ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar mejoras de competitividad del sector productivo, y en particular del sector industrial, destacándose la importancia de la inversión y el financiamiento”¹³.

El acuerdo entre el Gobierno Nacional y los industriales en torno a la agregación de valor, exportaciones y reorientación de recursos al (“preservación del”) mercado interno aparentó una revitalización de la rivalidad entre agro e industria, tan cara al siglo XX. De hecho, así lo interpretan Basualdo y Arceo en *Características estructu-*

¹⁰ Para los autores el “límite inferior” está dado por la reproducción misma de la fuerza de trabajo, mientras que nosotros lo interpretamos como aquel compatible con la “paz social”, es decir, que podría encontrarse por encima o incluso por debajo del nivel de reproducción de la fuerza de trabajo.

¹¹ Las alícuotas pueden encontrarse en el texto de la Resolución: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138567/norma.htm>

¹² En: <http://www.uia.org.ar/noticia/414>. Destacado nuestro.

¹³ En: <http://www.uia.org.ar/noticia/418>

rales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles (2009) al afirmar que la confrontación “indica la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital” (2009: 75). En cambio, desde nuestro punto de vista, los cambios operados en el agro y en la industria, la centralidad estructural de los sectores exportadores (agro, agroindustria e industria en su conjunto) y el rol determinante de las Manufacturas de Origen Agropecuario ¹⁴tiñeron de un modo *sui generis* el conflicto interburgués, desbordando los marcos de análisis construidos por el pensamiento económico latinoamericano a mediados del siglo XX.

La capacidad de los capitalistas del sector de industrialización de materias primas (MOA) de trasladar una parte importante del costo del “derrame” a otros eslabones (aguas arriba, los rentistas) de la cadena productiva, por un lado, y por el otro, los beneficios usufructuados por los capitalistas del resto de la industria manufacturera (es decir, los importadores-netos) motivaron la desestimación inicial de los reclamos de la Mesa de Enlace por parte de la UIA. Sin embargo, no puede menospreciarse el hecho de que desde el 14 de marzo de 2008 la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores Cerealeros (CEC) se sumaron a las protestas. “Si bien no tienen representación como cámara en la UIA, a ellas se encuentran asociadas empresas agroindustriales como AGD, Bunge, Cargill, LDC, Molinos y Nidera”, que formaron parte de la lista de alternancia de la UIA, la Celeste y Blanca (Coviello, 2014).

El 18 de marzo de ese año, ante la complacencia de la conducción de la UIA con el Gobierno Nacional, recrudeció el conflicto interburgués: “los productores rurales cordobeses bloquearon la entrada a la Aceitera General Deheza, perteneciente a la familia del senador nacional [oficialista] Roberto Urquía, quien había defendido el sistema de retenciones móviles” (Comelli, 2010: 29). Diez días más tarde, la entidad industrial publicó una solicitada donde llamaba al diálogo entre las partes; un modo diplomático de anunciar su neutralidad en el conflicto. El comunicado del 27 de marzo planteaba:

“Es incuestionable el rol del campo como eslabón clave de la cadena productiva nacional, incluyendo los numerosos sectores industriales que participan en su proceso productivo, los cuales están representados a través de sus cámaras en la Unión Industrial Argentina. Por ello nuestra institución considera que es su obligación reiterar la necesidad de reforzar los eslabones de las cadenas productivas para consolidar este exitoso ciclo económico, en el cual todos los sectores deben estar integrados para alcanzar el desarrollo que nuestro país requiere. En este sentido y frente a los momentos de alta sensibilidad que estamos transitando, es necesario remarcar la necesidad del diálogo franco y responsable entre las partes”¹⁵.

No es el propósito del presente trabajo realizar una detallada cronología del conflicto (que puede consultarse en Comelli et al., 2010), sino que nos proponemos destacar algunos elementos que permitan comprender el comportamiento de

¹⁴ MOA, según la clasificación del INDEC

¹⁵ En: <http://www.uia.org.ar/noticia/421>

las clases y fracciones de clases intervinientes a la luz del conflicto distributivo. En el informe sobre la *Actividad Industrial* publicado oficialmente por la UIA, la entidad daba cuenta de las secuelas que estaba sufriendo a causa de un conflicto del que pretendía mantenerse neutral: “El mes de marzo mostró una desaceleración de la actividad industrial, al presentar un crecimiento interanual del 3%. Sin embargo, este comportamiento se debió fundamentalmente a la caída en la producción de la industria alimenticia (-10,1%), que tuvo lugar a partir de la segunda quincena de marzo, en el marco del paro agropecuario”¹⁶. En el informe sobre la *Actualidad del Comercio Exterior* correspondiente al mismo mes la entidad describía el aumento más que proporcional de las importaciones por sobre las exportaciones manufactureras¹⁷. Durante el mes de junio, “la actividad presentó una caída desestacionalizada de 4%. Este comportamiento estuvo ligado principalmente al conflicto en el sector agropecuario, toda vez que las caídas se concentraron en la industria alimenticia (-9,9%), fundamentalmente en la molienda de cereales y oleaginosas (-25,6%) y carnes rojas (-18,1%)” (*Actualidad Industrial*, Nro. 7, UIA).

La afectación de los intereses de la manufactura exportadora se tradujo en los posicionamientos de la UIA. Si bien nunca terminó por distanciarse abiertamente de la política del Gobierno Nacional, la central empresaria “realizó numerosas manifestaciones públicas –comunicados de prensa y dos visibles solicitadas el 27 de marzo y 17 de mayo–, para remarcar el ‘incuestionable rol del campo’ en el desarrollo nacional, instando al ‘diálogo franco y responsable entre las partes’, expresando que un futuro acuerdo institucional con vistas al Bicentenario ‘es impensable e imposible sin la participación activa del sector agropecuario’. Asimismo, alertó sobre las graves consecuencias que la situación planteada estaba generando a toda la sociedad argentina’ (Lascurain en *La Nación* 30/07/2008¹⁸). En otra muestra de apoyo implícito a la Mesa de Enlace los “representantes de la UIA se habían reunido con la Presidenta para tratar el Acuerdo del Bicentenario, una propuesta que el GN [Gobierno Nacional] quería sellar para el 25 de mayo. Sin embargo, sólo se analizó el temario a incluir en el acuerdo y no se logró un compromiso explícito de firmarlo, al menos hasta que no se resolviera el conflicto agropecuario” (Coviello, 2014: 15).

Mientras los sectores MOA lograron trasladar a los propietarios de la tierra los costos/pérdidas asociados a la redistribución, la forma distributiva persistió como una alianza entre clases *erosionada desde arriba*, por la cual –no sin disgustos– “todos ganaban”. El Conflicto del Campo afectó al conjunto de las cadenas productivas, cuyos eslabones iniciales se encontraban en el agro, permitió a los propietarios de la tierra reabrir el conflicto distributivo y puso en discusión el lugar que ocupaba el mercado interno: los capitalistas exportadores netos terminaron coludiendo –implícitamente– con la Mesa de Enlace. Finalmente, el conjunto de la burguesía exportadora (agropecuaria y agroindustrial e industrial) orientó su acción política a cerrar el “derrame” que alimentaba al mercado interno.

¹⁶ En: <http://www.uia.org.ar/noticia/430>

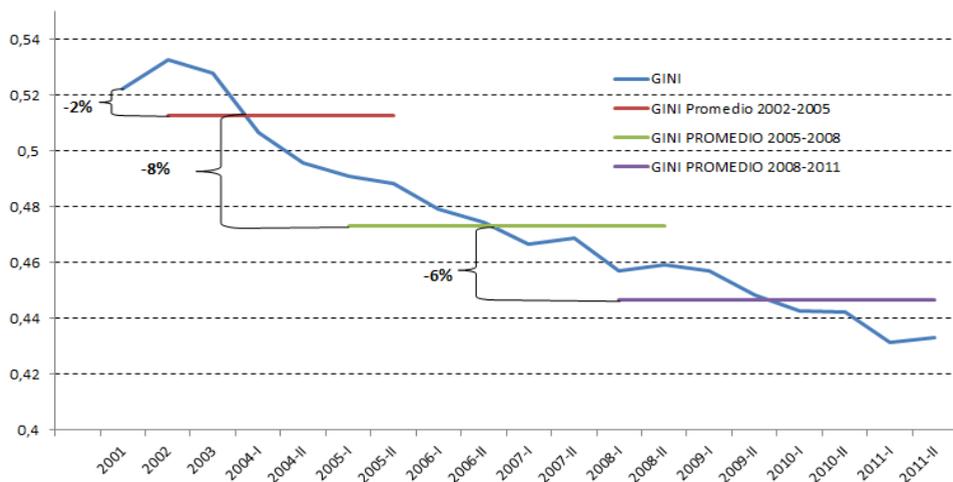
¹⁷ En: <http://www.uia.org.ar/noticia/435>

¹⁸ En: <http://www.lanacion.com.ar/1034698-cartas-de-lectores>

El 25 de mayo de 2008 se desarrollaron dos actos donde se cristalizaron las posiciones del Gobierno Nacional, por un lado, y las de la Mesa de Enlace, por el otro. Este enfrentamiento motivó fuertes discusiones tanto en movimiento obrero organizado como en los movimientos sociales. A grandes rasgos podemos decir que tanto la conducción de la CGT (Moyano) como de la CTA (Yasky) apoyaron al gobierno. Sin embargo, el sindicato de trabajadores rurales (UATRE) enrolado en la CGT y sectores vinculados a la FAA enrolados en la CTA se mostraron, aunque con diferentes argumentos, en las antípodas de la iniciativa gubernamental. Otros partidos de izquierda y movimientos sociales se posicionaron desde el “ni-ni”, tratando de señalar una posición equidistante tanto del gobierno como de las patronales agropecuarias. Estas diferencias marcaron el puntapié de fuerzas centrífugas que en los años siguientes dividieron cada vez más a los trabajadores.

En este complejo escenario la UIA encontró al tratamiento legislativo como una solución que le permitía apoyar a la Mesa de Enlace (desautorizando las competencias del Poder Ejecutivo en materia tributaria) sin romper los lazos con el Gobierno Nacional. El 5 de julio, el proyecto fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados. El 17 de julio de ese año la media sanción que pretendía convertir la Resolución 125 en ley fue tratada en el Senado de la Nación. El hecho mismo de la prolongación del conflicto y su canalización institucional/parlamentaria volvió a reafirmar que el Estado no puede pensarse como un mero representante del capital sino como un momento de la mediación entre las clases y las fracciones de clase. En tanto “que la burguesía en su conjunto, económicamente disgregada por la competencia, sólo puede constituirse políticamente como clase gracias a esa mediación del Estado” (Bonnet, 2012: 104), el empate y posterior definición “no positiva” del vicepresidente Cobos dio cuenta de una mediación que puso fin a las fuerzas centrífugas que operaban entre los capitalistas clausurando el “derrame” e institucionalizando una nueva correlación de fuerzas en el conflicto distributivo que modificó el tablero de alianzas y confrontaciones. A tan sólo 7 meses de la alianza entre peronistas y radicales, el experimento que pretendió mostrar al Estado como representante del interés general independizado de los intereses particulares, fracasó. Al menos quedó demostrado –sobre todo después del voto “no positivo”– que una estrategia de transversalidad política como la impulsada por el Frente para la Victoria no era compatible con una política que pretendía la paradójica situación en que el mercado interno subordine –mediante una redistribución cada vez más intensa– a los exportadores netos.

El año 2008 representó un punto de inflexión. El Conflicto del campo terminó modificando las correlaciones de fuerza en el conflicto distributivo de modo tal que nos permitiría afirmar el cierre de una primera gran fase de la postconvertibilidad, caracterizada por el avance de los trabajadores por sobre los capitalistas, a su vez subdividida en dos fases. La mejora persistente en la distribución del ingreso (GRÁFICO 5) desde 2003 hasta 2008 también enfrentó dos velocidades. Mientras que hasta el año 2005 el índice de Gini muestra una caída/mejora promedio respecto del 2001 de un 2%, desde ese año la distribución se aceleró y en promedio, entre 2005 y 2008, el índice cayó/mejoró un 8%. La disponibilidad de divisas y el superávit fiscal permitieron garantizar una mejoría importante en la distribución del ingreso hasta 2008, coherente con la fortaleza relativa de los trabajadores.

Gráfico 5. Distribución del ingreso per cápita familiar (GINI) (2001-2011)

Fuente: Elaboración propia en base a CEDLAS.

El Conflicto del Campo puede interpretarse como una crisis de instauración de un Estado Social (Lechner, 1975). El “derrame” puso en movimiento fuerzas sociales que buscaron bloquearlo intensificando el conflicto distributivo y erosionaron el consenso hasta provocar el estallido de un conflicto abierto, cuyo resultado no fue su resolución sino una indefinición prolongada: el *impasse* marcó la segunda gran fase de la postconvertibilidad hasta –al menos– el 2011. Las divisas que adquiría la burguesía exportadora garantizaba la expansión fiscal, monetaria y la estabilidad cambiaria. Es decir, que la reproducción ampliada del mercado interno y de la burguesía orientada “hacia adentro” requería de los recursos (plusvalía) que mediante las dos vías (comercial e impositiva) aportaba la burguesía orientada a la exportación. Sin esta redistribución resultaba imposible sostener la actividad interna, generar empleo y ampliar el consumo –pilares de la reconstrucción hegemónica–. En tales circunstancias la burguesía mercadointernista arribó a una contradicción en tanto: a) dependía de la exitosa inserción comercial de la burguesía exportadora neta y por lo tanto existían elementos objetivos que motivaban una alianza entre ambas fracciones con el objetivo de limitar la redistribución y las conquistas de los trabajadores; y b) requería de cierta correlación de fuerzas que garantice la mencionada redistribución desde los sectores exportadores, motivando una alianza con los trabajadores.

En el 2008, con el Conflicto del Campo quedó claro que en el capitalismo argentino de la postconvertibilidad no era posible gobernar persistentemente en contra de quienes conseguían los dólares que posibilitaban la expansión de la acumulación en el mercado interno. Por otro lado, no era posible construir gobernabilidad en contra de los sectores que vivían de y se reproducían en el mercado interno. El *impasse* se fundó en la separación (estructural) y autonomización (política) de dos esferas –el sector externo y el mercado interno que le era subsidiario–, en la necesidad de construir consenso y en la nueva correlación de fuerzas resultante del Conflicto del campo. El *impasse* marcó el fin de la ilusión de la conciliación de clases y el comienzo de una fase más puramente política, donde el gobierno debió maniobrar entre intereses

expresamente contrapuestos¹⁹. De hecho, no obstante, la Resolución 125 terminó derogándose –y con ella cayó el Ministro de Economía–, el Gobierno Nacional no renunció a seguir articulando las necesidades de ambas esferas y buscó la forma de seguir alimentando al mercado interno. Ello implicó por un lado un enfrentamiento más directo con los exportadores (un ejemplo fue el discurso de apertura de las sesiones legislativas) y por el otro un crecimiento de la intervención estatal: la (re) estatización del sistema jubilatorio facilitó liquidez a las políticas públicas expansivas a la vez que eludió un enfrentamiento por una reforma fiscal integral. Durante el *impasse*, la expansión económica tendrá como corolario el descenso del superávit fiscal (GRÁFICO 5).

En este contexto, las elecciones legislativas del 2009 se presentaban como la gran oportunidad para un recambio parlamentario favorable a los exportadores netos que permitiera colocar un torniquete al “derrame” o que al menos les otorgue nuevas concesiones. La derrota del Gobierno Nacional, sin embargo, sólo complejizó el *impasse*. Frente al adverso contexto internacional, lejos de ajustar el mercado interno, el Poder Ejecutivo intervino en la economía impulsando diversas medidas sociales gracias a la estatización de los fondos jubilatorios. La más trascendente consistió en el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo, un subsidio para trabajadores informales o formales de bajos ingresos.

5. Consideraciones finales

El conflicto distributivo nos permitió identificar dos grandes fases de la postconvertibilidad. Luego del shock distributivo (regresivo) que implicó la devaluación de enero de 2002, la primera fase estuvo marcada por una nueva correlación de fuerzas, que coadyuvó una nueva mediación estatal para la reconstrucción del consenso. El Estado incorporó las demandas de trabajadores y capitalistas mercadointernistas que por su fuerza relativa lograron apropiarse en el conflicto distributivo de parte de los frutos del comercio exterior. Esta misma primera fase se desdobló en 2005, a partir de la erosión creciente del consenso por la displicencia de los sectores exportadores a financiar a través de vía distribución del ingreso (tanto por la vía fiscal como por la disponibilidad de divisas) el crecimiento del mercado interno.

El Conflicto del Campo en 2008 a la vez que cerró la fase consensual no logró torcer las correlaciones de fuerza de tal modo como para forzar un consenso favorable a los sectores exportadores. Por el contrario, a partir del “voto no positivo” y hasta –al menos– el 2011 se amplió la autonomización del ritmo de crecimiento del mercado interno (consumo de divisas) y del sector externo (adquisición de divisas), a su vez articuladas por una también creciente intervención estatal, configurando un *impasse* en la segunda fase de la postconvertibilidad. Dicho de otro modo, el *impasse* emerge de la irresolución de las contradicciones entre los intereses de los diferentes clases y fracciones de clase una vez que los recursos escasean y de la pretensión de fugar hacia adelante dicha resolución satisfaciendo por momentos a unos u otros. En la segunda parte de la postconvertibilidad se volvió más estrecha la senda de una política económica que no rompiera los “límites inferiores o superiores” de la “paz social”.

¹⁹ Sobre el Estado y su capacidad (y límites) de representar el interés general puede revisarse los textos de Lechner (1975 y 1977)

Si durante la primera gran fase de la postconvertibilidad constatamos un corte de clase vertical, después del Conflicto del campo la lucha en torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del plus trabajo comenzó a tomar otro cariz. Para los empresarios dedicados a la exportación, los incrementos salariales sólo constituían una pérdida de ganancias en tanto, por un lado, persistió una estabilidad nominal del tipo de cambio y, por el otro, la realización de sus mercancías no dependía de esos trabajadores. Además, estos sectores empezaron a pedir una devaluación que volviera a licuar el salario de sus propios trabajadores. En la esfera inferior, los empresarios dedicados a abastecer al mercado interno se vieron perjudicados por el incremento del salario real que pasó a convertirse más en un costo que atentaba contra su tasa de ganancia que una demanda que la sostenía. Por consiguiente, tanto en el frente externo como en el frente interno existían elementos que acercaban los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía. El otrora corte vertical que articulaba los intereses entre diferentes clases, en la nueva fase de la postconvertibilidad se tornó en un corte cada vez más horizontal.

6. Bibliografía

- Aglietta, M. ([1976] 1999). *Regulación, y crisis del capitalismo*. México: Siglo XXI.
- Aranda, R. (2004). “La política exterior de Menem a Kirchner”, en *Revista Relaciones internacionales*, 13 (27): 39-58.
- Arceo, E., Basualdo, E. y Arceo, N. (2009). *La crisis mundial y el conflicto del agro*. Buenos Aires: UNQ-CCC.
- Barsky, O. y Dávila, M. (2009). *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*. Buenos Aires: Sudamérica.
- Basualdo, E. (2008). *La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales*. Argentina: CELS.
- Bonnet, A. (2002). “Que se vayan todos. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad”, en *Cuadernos del Sur*, 18: 71-84.
- Bonnet, A. (2012). “Riñas en la cofradía. Los conflictos interburgueses en las crisis argentinas recientes”, en *Conflicto Social*, 5 (8): 65-122.
- Comelli, M. et al (2010). “La trama de un conflicto extendido. El conflicto agrario marzo-julio de 2008”, en Giarracca, N. y Teubal, M. (coords.). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*, Buenos Aires, Antropofagia.
- Coviello, R. (2014). “El posicionamiento de la Unión Industrial Argentina durante el conflicto agropecuario de 2008”, en *Realidad Económica*, 282: 125-126.
- Damill, M., y Frenkel, R. (2013). *La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros*. Argentina: ITF-CEDES.
- Dossi, M. V. (2012). *La Unión Industrial Argentina: Su organización y vinculaciones con el mundo de las corporaciones empresarias*. Argentina: IDAES.
- Gaggero, A., & Wainer, A. (2004) “Burguesía nacional – Crisis de la convertibilidad: El rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio”, en *Realidad Económica*, 204. En: <http://www.iade.org.ar/noticias/burguesia-nacional-crisis-de-la-convertibilidad-el-rol-de-la-uia-y-su-estrategia-para-el>
- Jessop, B. (1980). “Teorías recientes sobre el Estado capitalista”, en *Críticas de la Economía Política*, 16/17: 15-18.

- Lechner, N. ([1976] 2012) “Contra la ilusión del Estado social”, en *Obras completas*, Tomo I, México: Fondo de Cultura Económica-FLACSO.
- Lindenboim, J. (2007). “Calidad del empleo y remuneraciones: el desafío actual”, en *Realidad Económica*, 228. En: <http://www.iade.org.ar/articulos/calidad-del-empleo-y-remuneraciones-el-desafio-actual>
- Merlo S. y Muro de Nadal, M. (2010). *La alianza entre las entidades del agro en el marco de la comisión de enlace: ¿Un pacto coyuntural o acuerdo permanente?* Argentina: CIEA-FCE-UBA.
- Muller, W. y Neusüss, C. (1970). “La ilusión del Estado Social y la contradicción entre trabajo asalariado y capital”, en *Sozialistische Politik*, 6/7. En: <https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2691>
- Ortiz, R. y Schorr, M. (2006). “La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la ‘década perdida’”, en Pucciarelli, A. (coord.). *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Argentina: Siglo XXI.
- Peralta-Ramos, M. (2007). *La economía política argentina: poder y clases sociales, 1930-2006*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Piva, A. (2012). *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*. Buenos Aires: Biblos.
- Piva, A. (2015). *Economía y Política en la Argentina kirchnerista*, Argentina: Ed. Batalla de Ideas.
- Piva, A. (2017). “El modo de acumulación de capital en Argentina (1989 – 2015)”, en *Revista Ensamblés*, 6: 53-79.
- Porta, F., Santarcángelo, J. y Schteingart, D. (2014). *Sobre el Excedente y desarrollo industrial en Argentina*. Argentina: CEFID-AR.
- Portantiero, J. C. (1973) “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en Braun, O. *El capitalismo argentino en crisis*. Argentina: Siglo XXI.
- Portantiero, J. C. (1977). “Economía y política en la crisis argentina: 1858-1973”, en *Revista Mexicana de Sociología*, 39 (2): 18-31.
- Poulanzas, N. (1986). *Poder político y clases sociales*. México: Siglo XXI.
- Prebisch, R. ([1949] 1950). “El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas”, en *Revista de Ciencias Económicas*, 38: 45-61.
- Salvia, S. (2009). *Crisis del neoliberalismo, lucha interburguesa y desarrollo capitalista en la argentina (1999-2005)*. Actas XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Buenos Aires: Asociación Latinoamericana de Sociología.
- Schorr, M. (2001). *¿Atrapados sin salida?: la crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico*. Argentina: FLACSO.
- Schteingart, D. (2011). *La concepción del desarrollo de la Unión Industrial Argentina (2000-2010)*. Argentina: IDAES.